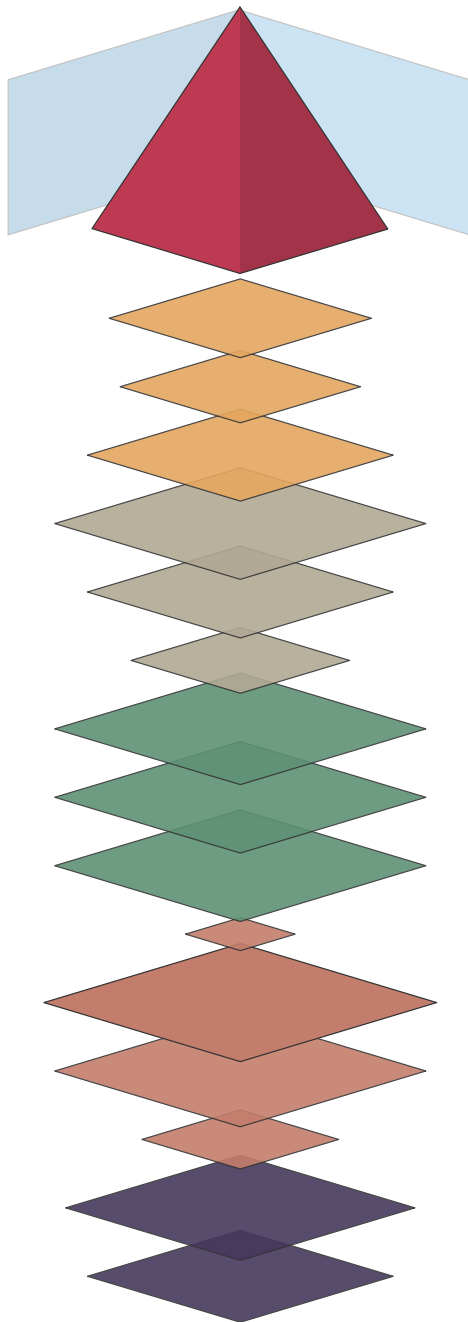


 **BRASIL**



 **6,77**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

22.º de 193 países
7.º de 35 países americanos
4.º de 12 países de América del Sur

 **MERCADOS CRIMINALES** **6,93**

TRATA DE PERSONAS	6,00
TRÁFICO DE PERSONAS	5,50
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	7,00
TRÁFICO DE ARMAS	8,50
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	7,00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	5,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	8,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	8,50
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	8,50
COMERCIO DE HEROÍNA	2,50
COMERCIO DE COCAÍNA	9,00
COMERCIO DE CANNABIS	8,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	4,50
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	8,00
DELITOS FINANCIEROS	7,00

 **ACTORES CRIMINALES** **6,60**

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	8,00
REDES CRIMINALES	7,00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8,50
ACTORES EXTRANJEROS	3,50
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	6,00

 **4,92**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA



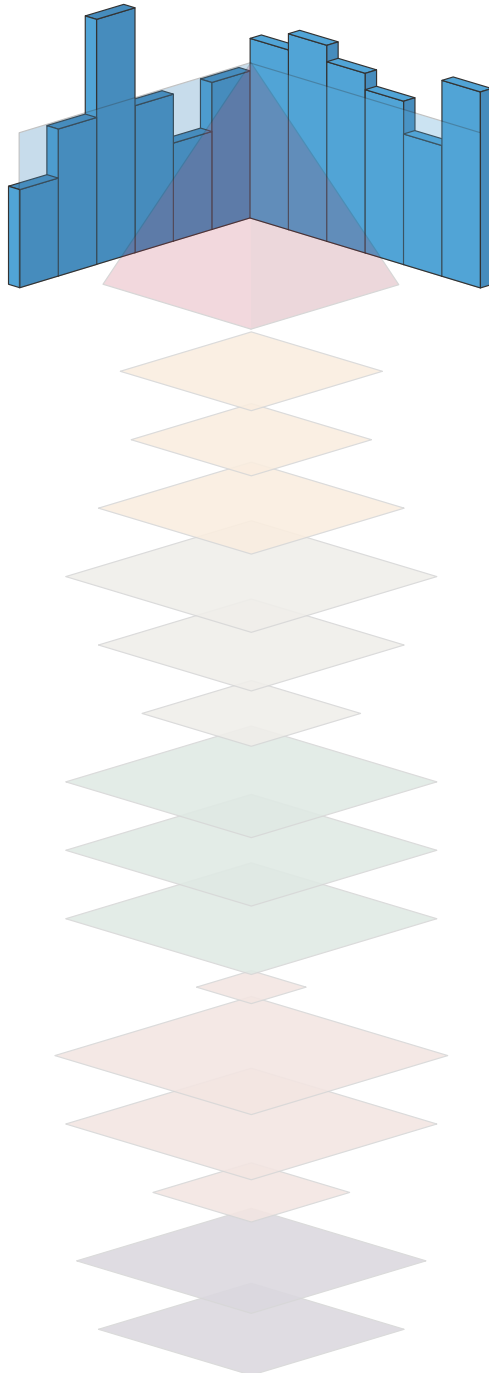
Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **BRASIL**



 **4,92**
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

94.º de 193 países
18.º de 35 países americanos
5.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	7,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	4,50
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	6,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	4,00
ACTORES NO ESTATALES	6,00

 **6,77**
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

 MERCADOS CRIMINALES	6,93
 ACTORES CRIMINALES	6,60



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Brasil es un país tanto de origen como de destino de la trata de personas, con víctimas procedentes de América Latina, el Caribe, África y China. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que las personas, especialmente los niños, sean más vulnerables a la trata de personas y los delincuentes están explotando las redes sociales, los mercados y otras plataformas para llegar a más víctimas. Los principales implicados en la trata de personas son familiares o amigos de las víctimas, a los que los grandes empresarios pagan por reclutar personas. En algunos casos, las víctimas femeninas, pobres o extranjeras pueden convertirse ellas mismas en reclutadoras. Los funcionarios y la población en general suelen pasar por alto e incluso normalizar este delito.

Además, Brasil se ha convertido en un centro de tráfico de personas que entran y salen del país por diversos motivos. En los últimos años, un número récord de brasileños han sido detenidos por cruzar ilegalmente la frontera sur con Estados Unidos, debido a la crisis económica y a las expectativas de políticas migratorias indulgentes. Algunas ciudades brasileñas, como Governador Valadares, en Minas Gerais, se han convertido en centros de inmigración ilegal, donde se venden «paquetes» de contrabando. Los intermediarios ayudan a personas de África y Asia a viajar a Brasil, a veces a través de la corrupción, proporcionándoles visados. Una vez en Brasil, pueden ser transportadas a diversos lugares de América, como Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá. La Policía Federal ha investigado casos de colaboración transnacional en el contrabando, que pueden implicar vínculos con el terrorismo.

La extorsión en Brasil es difícil de cuantificar, ya que no existen estimaciones a escala nacional, pero las organizaciones de tipo mafioso recurren con frecuencia a la extorsión durante sus actividades. La extorsión se ha generalizado en los últimos años, debido a la expansión de las milicias, que cobran tasas de protección a las empresas locales y a la población por el uso de diversos servicios.

TRÁFICO

El tráfico ilegal de armas en Brasil es un problema importante, ya que el país es un gran productor y exportador de armas pequeñas. Las armas de fuego se introducen de contrabando en el país desde Paraguay, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay. Los jóvenes delincuentes tienen fácil acceso a las armas de fuego ilegales y las redes locales y transnacionales gestionan la mayor parte del tráfico. Este mercado ilegal alimenta los conflictos entre los grupos criminales y las fuerzas de seguridad, lo que convierte a Brasil en uno de

los países con mayor índice de homicidios de la región. La corrupción y la ineficacia del sector de control de armas de la Policía Federal también contribuyen al problema, ya que un porcentaje considerable de las armas incautadas fueron adquiridas legalmente. A pesar de ello, en los últimos años el Gobierno ha facilitado la compra y la tenencia de armas con la aplicación de al menos ocho decretos.

Los productos falsificados son un problema cada vez mayor para los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de productos como ropa, perfumes, medicamentos, coches de lujo, dispositivos electrónicos, ordenadores y teléfonos móviles. La mayoría de los productos falsificados se fabrican en China y se envían a otros países latinoamericanos, antes de exportarlos a Brasil, para engañar a las autoridades brasileñas sobre su origen. Los productos falsificados son una fuente de ingresos y un medio de supervivencia para muchos brasileños empobrecidos y el mercado está dominado por organizaciones delictivas violentas, que utilizan los beneficios para financiar otras actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas.

El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, como las labores del tabaco y las bebidas alcohólicas, es también un mercado delictivo en expansión en el país. El contrabando de cigarrillos a Brasil está impulsado por la gran diferencia impositiva entre Brasil y Paraguay, ya que Paraguay tiene uno de los impuestos más bajos del mundo para estos productos. Sin embargo, el Gobierno ha determinado que reducir los impuestos sobre el tabaco no es la solución para reducir el comercio ilícito. En su lugar, planea aumentar el control y ha puesto en marcha sistemas de seguimiento y localización de estos productos.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal y la deforestación se han convertido en graves problemas en la selva amazónica de Brasil, donde cada año se registran niveles récord de deforestación. Los estudios demuestran que casi toda la madera que sale de la Amazonia procede de fuentes ilegales o irregulares y los grupos de crimen organizado implicados en la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la agricultura con responsabilidades medioambientales suelen ser la fuerza motriz de estas actividades. El apoyo público del Gobierno a los madereros y a los agricultores del agronegocio, así como el desmantelamiento de organismos federales esenciales, han contribuido a los mayores niveles de deforestación de los últimos años. Las bandas criminales utilizan los delitos contra el medio ambiente como una oportunidad para acumular capital y su implicación a menudo se traduce en violencia contra las comunidades indígenas, los activistas y las autoridades. Además, las empresas legales, ayudadas

por la corrupción y la limitada capacidad de control, también contribuyen a las prácticas irregulares, lo que dificulta la distinción entre comercio legal e ilegal en la Amazonia.

El tráfico de especies silvestres es otro de los grandes problemas de Brasil, que sigue siendo uno de los principales países de comercio ilegal de especies silvestres, debido a la debilidad de su legislación y a la insuficiente respuesta pública. La legislación brasileña sobre delitos contra el medio ambiente considera el tráfico de animales un delito menor, lo que da lugar a penas poco severas. Los traficantes de fauna silvestre operan tanto en el mercado nacional como en el internacional. El comercio nacional está dirigido por personas de bajos ingresos que capturan animales y los venden para obtener ingresos extras en autopistas, ferias y paradas de autobuses. El comercio internacional se caracteriza por ser un mercado más organizado, con redes que utilizan la corrupción y el soborno para falsificar documentos y eludir las inspecciones.

La minería ilegal, sobre todo en el estado de Pará, también se ha convertido en una preocupación creciente en Brasil. Las organizaciones criminales invaden territorios protegidos, provocando tensiones sociales y violaciones de los derechos humanos. A pesar del programa gubernamental de apoyo al desarrollo de la minería artesanal y a pequeña escala, la minería no regulada es mayor que la industrial en el país. Grupos delictivos y poderosas entidades económicas dominan el panorama minero nacional, lo que provoca violencia, explotación sexual, hambre y destrucción y contaminación del medio ambiente. Los indígenas son especialmente vulnerables a los ataques de los mineros. Aunque Brasil no figura entre los mayores mercados mundiales de productos de la minería ilegal, hay cientos de zonas de minería ilegal en la Amazonia brasileña.

DROGAS

Aunque el mercado de heroína en Brasil es limitado, debido a los envíos irregulares desde Asia y a las rutas poco desarrolladas, ha aumentado el uso no médico de opioides recetados. Preocupa que, sin controles más estrictos, en Brasil pueda aumentar el consumo de opioides ilegales como la heroína, como ocurre en otros países.

En cambio, el mercado brasileño de cocaína mueve miles de millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los diez principales del mundo. Las organizaciones delictivas, incluidas las élites locales, controlan las principales rutas de entrada de cocaína al por mayor en Brasil, lo que provoca violentos conflictos por la distribución en los centros urbanos. La venta al por menor de cocaína es una importante fuente de ingresos para la población pobre de la periferia de las grandes ciudades y ha contribuido a su implicación en la delincuencia. Aunque la pandemia afectó el tráfico de cocaína en Brasil, los traficantes se adaptaron, diversificando sus rutas nacionales y sus destinos internacionales.

Brasil también tiene un gran mercado de cannabis. Aunque la posesión de pequeñas cantidades de cannabis para consumo personal está despenalizada, la venta sigue siendo ilegal, lo que provoca un aumento del contacto con el sistema de justicia penal y las cárceles. Los grupos de crimen organizado nacionales controlan el cultivo local, pero Paraguay es el principal proveedor del país. La marihuana colombiana, conocida como *creepy*, es cada vez más popular, debido a sus efectos más potentes. Las rutas de tráfico de la marihuana colombiana suelen pasar por Venezuela antes de entrar en Brasil, por la frontera con Roraima, o por Perú y Bolivia y entrar en territorio brasileño por los estados de Acre, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Las bandas asociadas a diversas facciones criminales distribuyen la droga a escala nacional.

El comercio de drogas sintéticas en Brasil es relativamente reducido y se limita a la clase alta, con redes nacionales dedicadas a la producción de éxtasis y metanfetamina en pequeñas fábricas improvisadas. Sin embargo, se ha producido un aumento del tráfico internacional de estas drogas desde los países vecinos, así como de la distribución por correo desde los centros de producción nacionales del sur y el centro-oeste del país. Brasil también ha experimentado un aumento del consumo y las incautaciones de ketamina.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Brasil cuenta con una infraestructura tecnológica bien desarrollada. Sin embargo, la pandemia ha provocado un aumento de la ciberdelincuencia, que se ha más que duplicado. Los ataques de malware son habituales y Brasil está considerado uno de los principales países del mundo en ciberataques. Los principales objetivos de estos ataques son grupos políticos, periodistas, instituciones gubernamentales y empresas. El sector manufacturero es especialmente vulnerable a los ataques de ransomware. El malware brasileño Bizarro ha perpetrado importantes ataques contra 70 bancos de América del Sur. Además, se han utilizado infostealers para transferir información de los usuarios a los hackers.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son frecuentes en Brasil, siendo el fraude fiscal el más común. Este tipo de fraude suele implicar la venta de productos sin facturas, el uso de facturas duplicadas o anuladas y las ventas interestatales ficticias. Además, el fraude banco-cliente experimentó un aumento significativo en el 2021. Muchas redes criminales están especializadas en la evasión fiscal y la usura. La malversación de fondos públicos también es habitual en algunos estados, donde los funcionarios del Gobierno hacen tratos con mineros ilegales. Ha habido casos en los que oficiales del Ejército han formado milicias para ayudar a estos delincuentes. Como resultado, los cómplices de estos delitos parecen llevar a menudo una vida de lujo.



ACTORES CRIMINALES

El Primeiro Comando da Capital (PCC) es la mayor organización criminal de Brasil, con decenas de miles de miembros implicados en el tráfico de drogas nacional e internacional, principalmente a través de buques de carga. El Comando Vermelho (CV) es el segundo mayor grupo y compite con el PCC por el control del narcotráfico en determinadas zonas. Ambos grupos están implicados en otras actividades ilegales, como la minería ilegal, el tráfico de armas, los atracos a bancos, los secuestros y el blanqueo de dinero. En las zonas urbanas de Brasil también hay otros grupos delictivos que actúan como mafias, como los grupos de delincuencia de cuello blanco y las milicias independientes, compuestas por policías y ex policías. Estos grupos paramilitares son conocidos por extorsionar a los barrios, perpetrar ejecuciones extrajudiciales y controlar diversas industrias, como el suministro de gas y el transporte público.

Las redes criminales de Brasil suelen aliarse con el PCC o el CV y se han expandido en los últimos años, con un notable acceso a las armas, que contribuye a los altos niveles de violencia en todo el país. La violencia ha aumentado especialmente en los estados del norte y el noreste, mientras que en el sur las redes aliadas con los principales grupos mafiosos se están beneficiando de una ruta recientemente instituida para el tráfico de cocaína.

Además, el PCC y el CV tienen conexiones con mafias transnacionales de Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia para garantizar el envío y el transporte de droga a Europa. La mafia italiana también opera en Brasil, junto con otros países latinoamericanos, para transportar cocaína. La

zona de la triple frontera y la región amazónica son focos de actividades delictivas en las que participan redes nacionales y extranjeras.

En relación con los actores integrados en el Estado, las milicias y los grupos paramilitares formados por cuerpos de seguridad antiguos y actuales son especialmente preocupantes, ya que tienen capacidad para infiltrarse en los tres poderes del Estado, y se los ha relacionado con homicidios por motivos políticos. Controlan determinados territorios de Río de Janeiro y se dedican a actividades delictivas, como el cobro de tasas de seguridad y vivienda y la instalación de centros clandestinos de televisión por cable e Internet. En los últimos años, la relación entre las milicias y la política se ha hecho cada vez más evidente y los políticos utilizan los vínculos con estos grupos para hacer valer sus intereses y silenciar a sus oponentes. La violencia paramilitar, especialmente en Río, sigue siendo un problema importante.

El fraude fiscal y el blanqueo de dinero son frecuentes en Brasil, siendo la evasión de impuestos y el fraude operativo prácticas habituales entre los empresarios. La minería ilegal es otro problema importante, a menudo facilitado por intermediarios y empresas legales, con mineros que colaboran con los gobiernos locales para recibir armas y abusar de los pueblos indígenas que luchan por sus tierras. También se acusa a los madereros de participar en actividades ilegales de tráfico de madera y hay pruebas que sugieren un vínculo entre el narcotráfico y grupos relacionados con delitos medioambientales. Además, los actores del sector privado son utilizados con frecuencia como facilitadores por actores extranjeros, especialmente en el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, con estafas de criptomoneda que a menudo se disfrazan de oportunidades ofrecidas por empresas privadas de prestigio.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La política brasileña tiene una larga historia de corrupción, en la que el liderazgo se basa en sistemas clientelares y pactos en el Congreso. La gobernanza y los cuerpos de seguridad son deficientes en las zonas de renta baja, donde prospera el crimen organizado, y las políticas de seguridad pública varían mucho de un estado a otro. Las estrategias punitivas, en las que se centran principalmente las iniciativas, no han hecho más que aumentar la violencia en el país. El sistema de justicia tiene fama de detener injustamente a la población pobre y marginada, mientras que los delincuentes peligrosos suelen quedar libres, lo que alimenta el crimen organizado que se origina en las cárceles. El crimen organizado ha sido un tema persistente en todas las campañas políticas y en

todos los gobiernos, con diversas soluciones propuestas. Además, las organizaciones delictivas intervienen en los procesos democráticos a escala regional y local, con milicias que atacan a los candidatos y amenazan a los civiles en determinadas zonas. En los últimos años, Brasil ha luchado contra la corrupción y la falta de transparencia. A pesar de la existencia de organismos independientes de investigación y enjuiciamiento, el Gobierno está fuertemente influenciado por intereses privados y criminales. Aunque Brasil cuenta con un sólido marco jurídico para el acceso a la información, la corrupción sigue siendo un problema importante en la política brasileña y los mecanismos de transparencia no han sido eficaces para disuadirla ni para frenar el crimen organizado.

Brasil participa activamente en los esfuerzos de cooperación internacional contra el crimen organizado, como la firma y la ratificación de tratados y convenios sobre drogas, tráfico de armas y trata de personas y la firma de tratados de extradición con numerosos países. También es miembro del bloque comercial MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y tiene varios acuerdos de cooperación con organismos internacionales y gobiernos para intercambiar experiencias sobre políticas de seguridad pública y estrategias de lucha contra la delincuencia. Brasil cuenta con un sólido marco jurídico para luchar contra la delincuencia, pero el Gobierno carece de eficacia y capacidad para hacer cumplir la ley, debido a la corrupción y el clientelismo. El Código Penal y otras leyes tipifican una amplia gama de delitos, pero la Policía reacciona sobre todo cuando surge la violencia o cuando se enfrenta a pequeños operadores, en lugar de actuar de forma preventiva.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema de justicia penal brasileño es ampliamente criticado por ser ineficaz, corrupto y parcial contra los negros y los pobres, debido a los prejuicios raciales y de clase entre los profesionales del derecho. El Ejecutivo ha intentado interferir en la autonomía del Poder Judicial, lo que ha provocado la polarización política y la impugnación de las decisiones del Ejecutivo por parte del Tribunal Supremo. Aunque instituciones como la Fiscalía General y la Policía Federal son eficaces en la investigación de delitos, la impunidad sigue siendo un problema común. Las prisiones sufren problemas estructurales, como el hacinamiento y las malas condiciones, que han contribuido al desarrollo de redes criminales.

En Brasil, los cuerpos de seguridad tienen un enfoque militarizado de la seguridad pública, lo que ha provocado violencia policial y bajos niveles de confianza pública. La expansión y la militarización de las estrategias policiales han provocado un aumento de la violencia y el encarcelamiento, convirtiendo a Brasil en uno de los países más violentos del mundo, con una importante población carcelaria. Las fuerzas policiales estatales han sido acusadas de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes y negros en zonas marginadas y la corrupción policial es rampante. Sin embargo, la Policía Federal sigue siendo el cuerpo policial mejor equipado del país y la Fuerza Nacional refuerza la labor de las fuerzas armadas y la Policía civil en algunos estados del país. Algunas fuerzas policiales, como la Policía Federal de Carreteras, son sospechosas de haber apoyado la tensión electoral que recorrió el país durante las elecciones presidenciales del 2022. Aunque el país emplea con frecuencia a las fuerzas armadas en operaciones contra el crimen organizado, la falta de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad sigue siendo un reto.

Las vastas y complejas fronteras de Brasil son vulnerables al crimen organizado transnacional. La Triple Frontera, donde Brasil limita con Argentina y Paraguay, es un importante

centro de tráfico de drogas, tráfico de armas y otros delitos. Además, las rutas de la minería ilegal y el narcotráfico predominan en las regiones fronterizas del norte y el noreste con Venezuela. En el interior del país, las organizaciones delictivas y las milicias ejercen una influencia significativa en las zonas urbanas y en el proceso político, lo que plantea nuevos retos para los cuerpos de seguridad.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Brasil cuenta con medidas eficaces para perseguir el blanqueo de capitales y es miembro activo tanto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica como del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sin embargo, en el pasado se ha expresado preocupación por la falta de responsabilidad a la hora de abordar algunas deficiencias claves. Actualmente, se considera que el país presenta riesgos moderados de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El entorno normativo de Brasil se considera poco favorable a las empresas. El entorno fiscal del país es uno de los principales factores que contribuyen a la complejidad económica, con diversos impuestos en cada nivel de Gobierno, lo que dificulta a las multinacionales que desean operar en el país. Aunque el Gobierno ha tomado medidas para simplificar la burocracia y reformar sistemas como el de pensiones, la estructura sigue siendo difícil de manejar.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Brasil cuenta con un programa de protección de víctimas y testigos que ofrece apoyo, atención sanitaria y asistencia psicológica a cientos de personas al año. Sin embargo, el programa ha sido criticado por no proporcionar orientación y apoyo adecuados en relación con el anonimato. Además, la esclavitud moderna, la trata de personas y el contrabando siguen siendo problemas notables en las zonas más pobres y las tácticas policiales en las ciudades son de mano dura, lo que da lugar a que las víctimas del crimen organizado sean tratadas como delincuentes o asesinadas extrajudicialmente por la Policía. Las investigaciones sobre homicidios policiales son escasas y los familiares de víctimas y testigos denuncian a menudo la falta de apoyo.

El Gobierno brasileño tiene varias campañas destinadas a prevenir el consumo de drogas, la trata de personas y el tráfico de fauna. Instituciones no estatales también participan en la aplicación de estrategias de prevención. Uno de los principales programas de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes lo lleva a cabo en las escuelas la Policía Militar de todos los estados brasileños. Sin embargo, ha sido criticado por no contar con una evaluación de su eficacia y por no implicar a especialistas en el tema de las drogas. También se llevan a cabo acciones muy visibles en todo el país para alertar contra el tráfico de personas y actores no estatales trabajan con miembros del Congreso y el Senado para concienciar y apoyar cambios legislativos que mejoren la lucha contra estos delitos. No

obstante, sigue siendo difícil aplicar mecanismos complejos para la prevención del crimen organizado y son escasas las políticas de desarrollo socioeconómico dirigidas a las zonas urbanas de bajos ingresos. Otro reto para las estrategias preventivas es que los jefes del crimen son capaces de operar y mantener su influencia desde dentro de las prisiones o de comunidades cerradas adineradas. A pesar de los intentos de aprehensión, siguen conservando el poder y continúan coordinando las actividades delictivas.

Bajo el Gobierno anterior, el Estado incrementó sus ataques contra periodistas y ONG, lo que provocó un deterioro de las libertades civiles. La violencia contra los periodistas aumentó más del doble entre el 2019 y el 2021. Aunque el entorno mediático en Brasil sigue siendo vibrante y los medios de comunicación han denunciado sistemáticamente la corrupción, la cobertura del crimen organizado es escasa y las organizaciones mediáticas se niegan a mencionar los nombres de los grupos delictivos. La situación es especialmente peligrosa para los activistas medioambientales y los líderes indígenas, que sufren acoso y amenazas, debido a la política del Gobierno con respecto a la Amazonia y las tierras indígenas. Las organizaciones de la sociedad civil han proliferado en las zonas urbanas de renta baja, prestando asistencia a las comunidades mediante asesoramiento jurídico y campañas de sensibilización, así como educación, servicios sanitarios y apoyo a las pequeñas empresas. Sin embargo, la capacidad y la voluntad del Estado brasileño de proteger a los actores no gubernamentales han seguido deteriorándose.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.